

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Wilson de Jesús Muriel Muriel
DEMANDADAS	Colpensiones
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 015 2019 00784 01
TIPO DE PROCESO	Ordinario
DECISIÓN	Revoca
ACTA DE DECISIÓN	67 de 2021

Medellín, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. representada legalmente por el señor Richard Giovanny Suarez Torres, identificado con cédula de ciudadanía 79.576.294, inscrito en el certificado de Cámara de Comercio de dicha sociedad, y por sustitución de éste se le reconoce personería al Dr. Luis Eduardo Gómez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 1.061.748.175 y tarjeta profesional 339.879 del Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por la apoderada de la parte demandante contra la decisión del 20 de octubre de 2020 que niega decreto de prueba.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Con la demanda se pretende el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo (minería en socavón), desde que el accionante cumplió con los requisitos de los artículos 3º y 4º del Decreto 2090 de 2003.

Entre las pruebas solicitadas en la demanda, se pidió la prueba testimonial, la cual fue negada por la A quo en la audiencia del 20 de octubre de 2020 al considerar que, conforme a los artículos 53 del CPT y de la S.S. y 212 del CGP, esta fue ilegalmente pedida al no estar el objeto concreto de la prueba. Y que además, la prueba documental aportada por las partes es útil y portante para la resolución de la litis. Indicó que dicha negativa la fundamenta también en acatamiento de los deberes del juez y sus poderes de ordenación e instrucción.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación indicando que, lo pretendido es una pensión especial por el demandante haber desarrollado una actividad de las catalogadas en el Decreto 2090 de 2003 como de alto riesgo, como lo es la minería en socavón. Dice que ese era el objeto, por lo que en el acápite de la prueba testimonial se dijo que los testigos declararían sobre el tipo de labor desarrollada por el demandante, pretendiéndose demostrar que se dedicó por más de 19 años a ejercer la labor de la minería en socavón, lo cual lo llevaría a ser beneficiario de la pensión solicitada.

Niega que la prueba se haya solicitado de manera ilegal, porque se está determinando concretamente su objeto, y los hechos de la demanda y sus pretensiones redundan en demostrar que es beneficiario de esa pensión por trabajar en minería socavón, que es una actividad que la misma ley cataloga como de alto riesgo. Considera que la prueba testimonial se debe recepcionar al ser necesaria y útil para determinar los hechos, y llegar a la conclusión si le asiste al demandante la razón en las pretensiones invocadas.

La a quo no repuso la decisión insistiendo en sus consideraciones, y concedió el recurso de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones presentó alegatos de conclusión indicando que el demandante no logra acreditar las semanas requeridas por el Decreto 2090 de 2003, por lo cual no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión deprecada.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, si fue adecuada la decisión de la a quo al negar el decreto de la prueba testimonial pedida en la demanda, en razón a la falta de enunciación de su objeto.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la competencia de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

No se tendrán en cuenta las alegaciones de Colpensiones, en tanto no aluden a la cuestión recurrida.

La A quo negó el decreto de la prueba testimonial con base en el artículo 53 del CPT y de la S.S., el cual indica que el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. Ahora, el juez de conocimiento debe analizar y determinar si las pruebas allegadas o solicitadas por las partes cumplen con los presupuestos de licitud, utilidad, conducencia y pertinencia, en relación con el objeto del debate para proceder o no a su decreto y práctica.

Frente a estos requisitos, indicó el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A¹:

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicación número: 25000-23-25-000-2015-00006-01(1556-17) del 8 de marzo de 2019.

“Al respecto, esta Corporación ha definido los anteriores requisitos indicando que la conducencia de la prueba «apunta a determinar si el medio probatorio solicitado resulta apto jurídicamente para acreditar determinado hecho. Por su parte, la pertinencia de la prueba se puede definir frente a los hechos alegados en el proceso respecto de los cuales gira verdaderamente el tema del libelo y, finalmente, la utilidad o eficacia de la prueba lo constituye el efecto directo dentro del juicio que informa al juez sobre los hechos o circunstancias pertinentes y que, de alguna manera, le imprimen convicción al fallador»².

La a quo también fundó su negativa en el artículo 212 del CGP, norma de la que se infiere que el decreto de la prueba testimonial se encuentra sujeta a dos condicionamientos: i) indicación del nombre, domicilio y lugar de residencia del testigo y, ii) la enunciación concreta de los hechos objeto de prueba.

En este caso, en el acápite de pruebas de la demanda, en el numeral 2º se indicó:

“Ruego señor juez llamar a declarar sobre los hechos de esta demanda en especial sobre el tipo de labor desarrollada por el demandante, la calidad del empleador y del oficio del demandante como minero de socavón, y de lo pertinente para demostrar los hechos y pretensiones y de la respuesta a la demanda, a las siguientes personas todas mayores de edad y vecinos de los (sic) municipio de Amaba Ant.”

Además, se informó la dirección y el teléfono de cada testigo anunciado, evidenciándose que se cumple con las condiciones exigidas en la norma. Además, que la prueba testimonial resulta i) conducente al ser apta jurídicamente para acreditar el tipo de labor desarrollada por el demandante en favor de los empleadores Industrial Hullera S.A. y Mineros Unidos S.A. ii) Es pertinente porque, los hechos alegados en el proceso respecto de los cuales gira verdaderamente el tema del libelo, aluden a la labor de alto riesgo desempeñada por demandante, la cual debe demostrarse para efectos del reconocimiento de la prestación pretendida, y iii) es útil o eficaz por el

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, auto de 27 de abril de 2017, radicado: 4100123310002010000520 03 (58.640), actor: INCOPAV S.A. – INSCO LTDA.

efecto directo de las declaraciones dentro del juicio, las cuales le informaran al juez sobre los hechos o circunstancias pertinentes dándole convicción al fallador.

De otra parte, las demás pruebas decretadas por la *a quo*, no impiden el decreto y practica de los testimonios. Contrario sensu, ante la inexistencia de tarifa legal probatoria para demostrar las pretensiones de la demanda, y conforme al principio de libertad probatoria, le es dable al juez analizar todas las pruebas para establecer su procedencia.

Razones suficientes para revocar la decisión recurrido, máxime que la prueba testimonial es uno de medios de prueba de mayor utilidad dentro de los procesos judiciales, en especial en los laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos que se reclaman y pretenden ser reconocidos.

Ahora, es de resaltar que si bien en este caso para la Sala no existe duda que se cumplió con ambas condiciones exigidas por el artículo 212 del CGP, y en especial, con la enunciación concreta de los hechos objeto de prueba echada de menos por la *a quo*, de no evidenciarse tal exigencia tampoco habría lugar a negar la prueba testimonial, pues como lo ha indicado el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, la carga impuesta por la norma no puede conllevar a la negación del derecho sustancial y el despliegue de las actuaciones necesarias para aclarar los supuestos fácticos sobre los cuales se edifica la *litis*. Al respecto indicó dicha corporación³:

“En el presente caso, el *a quo* negó el decreto de la prueba testimonial porque la actora no identificó detalladamente los hechos sobre los cuales se pronunciarían los testigos. Por su parte, la interesada

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicación número: 25000-23-25-000-2015-00006-01(1556-17) del 8 de marzo de 2019.

manifestó que los deponentes declararían «sobre lo que les conste con respecto a los hechos referidos en este proceso»; sin embargo, tal situación no es razón suficiente para que el juez se abstenga de practicar dicha prueba. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «si bien la norma consagra la exigencia de enunciar de manera concreta los hechos que serán materia de la prueba, no establece parámetros específicos para cumplir tal enunciación»⁴.

A su turno, con fundamento en los criterios orientadores de prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia, el Consejo de Estado se ha referido al deber que tiene el juez de realizar una lectura integral y contextualizada de la demanda, desde la etapa de admisión hasta la sentencia.

En efecto, el artículo 228 de la Constitución Política impuso al juzgador el deber de «ver la materia real del litigio con prescindencia de la forma; le dio una capacidad de acción, y con ella, lo convirtió en un verdadero rector del proceso con poderes de interpretación auténtica, se recaba, al exigirle que los juicios deben ser expresión del derecho sustancial; y al no distinguir éste, lo extendió al procedimiento y ritución del mismo y al acto de definición: la sentencia»⁵.

En este orden de ideas, si bien es cierto que la normativa procesal exige la enunciación concreta de los hechos que se pretenden probar a través de un testimonio, tal requerimiento no puede traducirse en un rigorismo que sacrifique valores y bienes jurídicos establecidos en normas sustanciales. En efecto, en el *sub lite*, una lectura armónica de los hechos de la demanda y la solicitud de la prueba testimonial, permite concluir que el objeto de la prueba es dar claridad frente a los supuestos fácticos sobre los cuales se edifican las pretensiones de la accionante.

Así las cosas, aunque la demandante se limitó a manifestar que los testigos llamados al proceso «declararán sobre lo que les conste con respecto a los hechos referidos en este proceso», sin precisar detalladamente cada uno de los referidos hechos, tal circunstancia no impide su recepción, por cuanto: a) el artículo 212 del Código General del Proceso no establece formas sacramentales respecto de la manera en que debe cumplirse el requisito de enunciar «concretamente los hechos objeto de la prueba»; y b) una lectura integral de la demanda permite inferir que el propósito de la accionante es demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se verificó el desempeño de las funciones que le fueron asignadas en el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. y que, en su sentir, hacen viable el reconocimiento de las

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejero ponente: Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 30 de noviembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2017-01940-01(AC), actor: MAYAGÜEZ S.A.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 8 de noviembre de 2001, radicado: 15001-23-31-000-1994-0135-01 (12853), actor: Armando Gaitán Garzón.

diferencias salariales reclamadas al amparo del derecho a la igualdad en las relaciones laborales.”

Así las cosas, se revocará la decisión recurrida y se ordenará decretar y practicar los testimonios solicitados por la parte demandante.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión del 20 de octubre de 2020 que se revisa en virtud del recurso de apelación, presentado por la apoderada de la parte demandante, y en consecuencia, se dispone decretar y practicar la prueba testimonial, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Sin costas en esta instancia

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 78 del 7 de mayo de 2021

consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO
ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12

Código de verificación:

a4129c0ef86f87b0d064aef77cb5a16ba453e47f849df1b97ced8b6d91305c1f

Documento generado en 06/05/2021 01:41:23 PM